

LA TRAMPA DEL CRECIMIENTO TITUBEANTE

David Ibarra
23 de abril de 1999

En los primeros meses del año en curso la economía mexicana transita por un período en que aparentemente todo mejora, singularmente en la perspectiva gubernamental y de financieros nacionales o extranjeros. En efecto, durante el primer trimestre del año, las tasas pasivas de interés se han reducido más de diez puntos; la inflación declina, esperándose una reducción del 25-30% con respecto a las cifras del año previo; los desajustes en la balanza comercial externa parecen abandonar una peligrosa espiral alcista; y el peso gana terreno al dólar (9% de apreciación en los últimos tres meses).

Se forma así una especie de círculo virtuoso, cuyos elementos constitutivos dan la impresión de reforzarse entre sí hasta configurar un panorama prometedor, del que sólo está ausente el vigor del crecimiento, la multiplicación de las oportunidades de empleo de la fuerza de trabajo.

Estabilización y crecimiento

Valga entonces explorar más a fondo las causas y la posibilidad de hacer permanente el mejoramiento macroeconómico ante el hecho desagradable de que la tasa de expansión económica se abate del 7% en 1997, a menos del 5% en 1998, pronosticándose alrededor del 2% a final del año en curso.¹

La explicación del comportamiento favorable de muchas de las variables económicas, debe encontrarse en la confluencia de las políticas adoptadas y de hechos fortuitos asociados principalmente al retorno de las corrientes de capitales. Comencemos

¹ Esta última cifra corresponde a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional.

por esto último. Sin duda las crisis recientes de países asiáticos y latinoamericanos, a la inversa de otras ocasiones, ha favorecido la canalización de ahorros foráneos hacia México en los últimos meses.² Asimismo, la baja en las tasas pasivas de interés en los países desarrollados, hace imperativa la búsqueda de oportunidades de colocación de fondos con rendimientos atractivos en las economías emergentes más confiables.

En lo que toca al papel de la política económica, el acierto paradójicamente ha consistido en reducir *ex-profeso* el ritmo de ascenso de la producción con el objetivo explícito de combatir las renovadas presiones inflacionarias y también con el propósito mucho más importante, pero menos publicitado, de evitar desajustes inmanejables en las cuentas externas. Obsérvese que el saldo de la balanza comercial de arrojar un superávit de más de 7 mil millones de dólares en 1995 y en 1996, pasó a cifras deficitarias superiores a 8 mil millones en 1998. El crecimiento anual de importaciones deja atrás al de las exportaciones de bienes y servicios. El diferencial entre ambas tasas de ser casi nulo en el ciclo 1995-96, llegó a un tercio en 1996-97 y al 50% en 1997-98.³ Los resultados en cuenta corriente enciende similares focos rojos. El déficit ha subido cerca de diez veces entre 1995 y 1998 (de 1.6 a 15.8 miles de millones de dólares), inaugurando otro ciclo expansivo de exigencias de financiamiento externo. Y cuando la tasa de crecimiento de la economía queda por debajo de la tasa de interés --como ocurre hoy día--, el servicio de la deuda externa sólo puede satisfacerse por algún tiempo acrecentando el endeudamiento externo o reprimiendo el consumo nacional.

² En parte a ello obedece el notable repunte de la Bolsa Mexicana de Valores cuyo índice ha subido de 3,970 a 5,370 puntos entre diciembre de 1998 y mediados de abril de 1999 (35% de incremento), recuperando con creces el primer impacto negativo de las crisis asiática y brasileña.

³ Debe subrayarse que este último dato está influido por la caída en los precios del petróleo.

Las consecuencias inmediatas

Puesto en términos de balanza comercial y de pagos, el ritmo asequible de ascenso del producto no puede exceder mucho del 3% anual. La razón es simple: por cada punto de ascenso en la actividad económica, las necesidades de importación crecen entre tres y cuatro veces; además, la expansión de los ingresos por exportaciones muestran una tendencia declinante (20% en 1996, 14% en 1997 y 6% en 1998), gestándose en conjunto una evidente tendencia al desajuste de pagos tan pronto se reanima la economía.

Las causas de ese fenómeno son igualmente claras. La abrupta apertura externa, no acompañada de políticas industriales compensatorias, destruyó muchas empresas y muchos encadenamientos interindustriales vernáculos, abriendo las puertas al abasto de bienes intermedios y de capital de origen foráneo. Ciertamente se obtuvieron ventajas, sintetizadas en el mejoramiento de precios o en la calidad de muchos productos; pero desde fines de la década de los ochentas, toma cuerpo un intenso proceso de desplazamiento de oferentes nacionales en el mercado interno, esto es, de sustitución negativa de importaciones. Además, el grado de integración nacional de las exportaciones manufactureras no ha logrado ensancharse en medida apreciable, como lo prueba fehacientemente el caso de las maquiladoras. Por consiguiente, el incremento en las ventas externas origina compras foráneas, desproporcionadas, sin impulsar decisivamente al resto de la economía.

Se ha recrudecido el estrangulamiento externo por encima de lo que ocurrió en la etapa del desarrollo proteccionista, cuando pudieron lograrse tasas perdurables —cuarenta años— de crecimiento del 6% o más, que hoy parecen inalcanzables. Al propio tiempo, el endurecimiento de los accesos de los países emergentes en los mercados de

capitales durante 1998, reforzó la necesidad de detener la hemorragia de pagos por importaciones.

Frente a ese conjunto de circunstancias, el manejo de los principales instrumentos monetarios y fiscales a partir del primer trimestre de 1998 se enderezó a corregir el sobrecalentamiento, insostenible en términos de balanza de pagos, de la economía. Desde marzo de ese año, se hicieron recortes presupuestarios repetitivos, se elevaron las tasas de interés y se usaron los llamados “cortos” del Banco de México a fin de reducir la liquidez monetaria. Sin embargo, esas medidas tardaron meses en producir los efectos deseados. Dos circunstancias limitan su eficacia en el tiempo. De un lado, el abatimiento del peso cuantitativo del sector público y, en consecuencia, de su capacidad de arrastre del conjunto de la economía; de otra parte, la renuencia de la banca comercial a ensanchar el otorgamiento de créditos, hace redundantes, ineficaces, los efectos contraccionistas de reducir la liquidez bancaria. En efecto, el crédito de la banca comercial al sector privado no financiero cayó 6% en términos reales durante 1997, mientras la economía crecía casi al 7%; y volvió a contraerse (4%) en menor proporción en 1998, cuando ya se instrumentaban las medidas restrictivas de referencia. Adviértase que después de la debacle del Fobaproa, la banca privada se ha tornado extremadamente cauta en asumir riesgos. Por eso, ha pedido se instale cuanto antes el nuevo Instituto de Protección al Ahorro y se cambie la legislación sobre cobranza, liquidaciones o quiebras (Ley General de Garantías). Además, la canalización del ahorro bancario hacia el sector público ha aliviado la presión de mantener inactivos los depósitos bancarios que no se prestan a las empresas privadas.

Los ciclos resultantes y los efectos de largo término

Acaso por eso se ha vuelto a caer en la práctica riesgósima de usar la apreciación cambiaria como vía de abatir la inflación y como mecanismo depresor de la

producción interna al confrontar a los empresarios nacionales a una oferta externa artificialmente competitiva. Las experiencias profundamente desestabilizadoras de 1982, 1987 y 1994, no han bastado para persuadirnos de la imposibilidad de sostener un tipo de cambio crecientemente sobrevaluado, cuando se registran tasas de inflación muy separadas de las de las economías de nuestros principales socios comerciales.⁴

Esa falta de realismo está en la raíz de los ciclos repetitivos de inflación y deflación, de avances limitados y recesiones profundas que se vienen experimentando en las últimas dos décadas. La primera fase arranca con la política de sobrevaluación cambiaria que abate inflación y tasas de interés; luego sigue la acumulación de presiones sobre la balanza de pagos, hasta que se torna inviable financiar los déficit externos de pagos. Al final, ello fuerza una devaluación brusca del tipo de cambio, la reanudación de las presiones inflacionarias y la adopción de medidas recesivas que producen depresión con alza de precios.

La amplitud y profundidad de esas oscilaciones resulta magnificada e incluso originada por la cuantía y volatilidad de los flujos internacionales de capitales de corto plazo que lo mismo llevan a dificultar enormemente el financiamiento de las brechas de pagos que a reforzar la sobrevaluación cambiaria. En lo que va del año en curso, la afluencia de capitales extranjeros ha provocado una apreciación del tipo de cambio del 6-7%, mientras en el año anterior explican parcialmente un movimiento devaluatorio inverso del 10%.

En el proceso suele contrariarse el objetivo central de la estrategia de desarrollo hacia afuera que reside en el acrecentamiento sostenido de las capacidades exportadoras, a la par de originar la elevación innecesaria de financiamientos externos. Los empresarios nacionales se benefician con los bajos salarios prevalecientes, pero no sólo

⁴ En 1998, el alza de precios en México resultó más de 8 veces superior a la de Estados Unidos.

encaran tasas de interés desmesuradas y transfieren gratuitamente muchos de los aumentos de productividad, sino también enfrentan incertidumbres mayúsculas en torno al tipo de cambio, el costo y el acceso al crédito y la evolución de los precios.⁵

Apreciar el tipo de cambio con el propósito de desinflar la economía con harta frecuencia propicia errores económicos graves. Los procesos de alzas de precios en países periféricos que transitan de patrones de crecimiento hacia adentro a estrategias de integración a los mercados mundiales, suelen reconocer causas que trascienden con mucho la influencia de los precios externos, ajustados por el tipo de cambio. Entre ellos cabría señalar las reacciones encontradas -pugnas distributivas- entre los ganadores y perdedores de las mudanzas económicas, la frecuente necesidad de desinflar la deuda interna,⁶ los desequilibrios fiscales, o inercias en la fijación de precios y tarifas del sector público, la elevación distinta de la productividad entre sectores productivos. Por consiguiente, poner demasiado énfasis en el combate a la inflación, suele retrasar el cambio en las estructuras productivas, la transferencia de recursos hacia las nuevas actividades dinámicas y somete a la economía a una situación cuasipermanente de estancamiento. Siempre es más fácil instrumentar mudanzas de orden institucional o estructural cuando las economías crecen que cuando quedan congeladas en una trampa de lento crecimiento.

La desventaja competitiva de los productores nacionales frente a la apreciación del tipo de cambio, significará un nuevo golpe a la pequeña y mediana industria del país y también a los exportadores. Eso tendrá posiblemente la consecuencia de debilitar una vez más la calidad de los activos bancarios o de acentuar la segmentación de los accesos

⁵ Baste mencionar el caso de las tasas de interés activas en pesos durante 1998, subieron de un rango de 30% a otro del 50% para luego abatirse al 30-40% en el primer trimestre del siguiente año. De otro lado, salvo unas cuantas empresas grandes, el crédito en moneda extranjera al sector privado nacional se sitúa entre una y cuatro veces lo que suelen pagar negocios similares en el exterior.

⁶ Sólo la asunción de pasivos asociados a Fobaproa, *grosso modo* llevará a duplicar la deuda interna en términos del producto.

al crédito de la banca comercial. En sentido contrario podría influir la reducción reciente en las tasas de interés. Sin embargo, el aflojamiento de las tasas pasivas (pagadas a ahorradores) ha sido acompañado por bajas menores en las de orden activo (cubiertas por los acreditados). En esas circunstancias, sería difícil esperar la reanimación del crédito al sector privado y el saneamiento definitivo de la banca. En marzo de 1999, la cartera vencida de los bancos comerciales no transferida a Fobaproa, ascendía al 79% de la suma de sus capitales contables y esa cifra, deducida de las reservas de previsión, representaba más del 21% de esos mismos capitales, esto es, entre cinco y siete veces, los estándares máximos de riesgo aceptados internacionalmente.

En otra vertiente, estabilizar el crecimiento de la economía con tasas del 3% anual o inferiores, deja sin acceso a la nueva fuerza de trabajo o a los amplísimos grupos de marginados a los beneficios de su incorporación al sector moderno de la economía. Si la productividad media en ese segmento de productores sube entre el 3% y el 4% por año, y los contingentes de nuevo ingreso al mercado de trabajo se expanden cerca del 3%, el equilibrio social apenas podría aproximarse si el producto asciende sostenidamente alrededor del 6% anual. De otra suerte, el acercamiento al empleo pleno o el combate a la exclusión social resultarían imposibles y la segmentación social con todos sus riesgos, seguiría ahondándose. Ya la presencia de más de 40 millones de pobres y cerca de 20 millones de indigentes, parece aconsejar el cambio de rumbo en algunos parámetros de la política económica.

Mirando al futuro

De aquí al año dos mil, la evolución probable de la economía mexicana en el supuesto que se mantenga sin mayores alteraciones la política vigente, muestra una posible bifurcación de escenarios, cuya concreción depende en altísimo grado de fenómenos aleatorios externos.

De un lado, si el acrecentamiento de la afluencia de capitales persiste y se combina con medidas rígidas de astringencia monetaria fiscal, será posible esperar la contracción de las tasas de inflación a un nivel que oscilaría entre la meta oficial (13%) y uno o dos puntos arriba, y una expansión de la producción que se situaría en el 2-3%. Acaso no fuesen factibles reducciones significativas en las tasas de interés, por cuanto ya están más bajas que en otros países emergentes; además se aproximan en términos reales, a las que se dan en los Estados Unidos, si se toma en cuenta el diferencial de inflación y el riesgo-país.⁷

En esa primera hipótesis --que supone no ocurren eventos externos desfavorables--, existen, sin embargo, algunos factores de incertidumbre. Uno se asocia a la posibilidad de que la declinación de la actividad económica persista, hasta transformarse en un receso más agudo. En tal sentido militan los conocidos obstáculos a lograr una sintonización fina de las variables económicas, en un año político-electoral --el 2000-- cuando suele retraerse la inversión nacional y la extranjera. En sentido opuesto, acaso podría darse mayor reanimación económica, alimentada por la afluencia de ahorros externos --aunque siga deprimida la inversión extranjera directa--, la recuperación de los precios del petróleo, la certidumbre de participar en el nuevo programa anticrisis del Fondo Monetario Internacional (9 mil millones de dólares) o por un ciclo político que levantara el gasto público en tiempos electorales. Así, el final de sexenio podría salvarse de una crisis económica. Sin embargo, con posterioridad habría de aceptarse algún ajuste macroeconómico ya que persistirían el estrangulamiento externo y otros escollos estructurales no resueltos, intensificados por la intensa apreciación cambiaria que viene teniendo lugar.

⁷ Los CETES a 28 días oscilan alrededor del 18-20% que con una tasa esperada de inflación del 15% arrojarían rendimientos reales del 3-5%, sin tomar en cuenta el riesgo país. En los Estados Unidos la tasa pasiva real de interés oscila alrededor del 3-4%.

En un escenario menos optimista, cabría incorporar la ocurrencia de *shocks* externos que rompiesen la estabilización alcanzada y, desde luego, interrumpiese aunque fuese parcialmente el influjo anual de unos 15 mil millones de dólares destinados a financiar la brecha externa. La terminación del auge norteamericano, el recrudecimiento de la crisis brasileña, el resquebrajamiento del régimen cambiario argentino o el ajuste del sobrevaluado mercado accionario de los Estados Unidos, son otras tantas ocurrencias que bien podrían afectar el comportamiento de la economía mexicana.

En tal situación, las autoridades seguramente intensificarían las medidas restrictivas de la actividad económica e incluso permitirían algún acomodo cambiario que marcara el reinicio del ciclo de ajuste y estabilización característico de las últimas dos décadas. Por supuesto, persistiría la paradoja de combatir recesión y ajuste con reducciones del gasto público, elevación de los impuestos y de las tasas de interés y de rezagos en la modernización productiva. Ahondar la depresión, es el precio de mantener la confianza de los mercados de inversionistas propios y extraños de una economía planetaria.

La vuelta al liberalismo económico globalizado ha traído consigo muchas ventajas --incluso la de promover el empleo en la periferia, mientras se debilita en los centros industriales--, pero también ha creado fallas sistémicas en el nuevo orden económico universal. La abolición de la autonomía para usar políticas nacionales contracíclicas, la aparición de inestabilidades financieras y crisis contagiosas o depresiones repetidas son parte inequívoca de los cambios que aún no se ha aprendido a combatir, singularmente entre los países del Tercer Mundo.

Guía parcial de sugerencias a precandidatos

En los dos escenarios básicos no parece resolverse la trampa del bajo crecimiento en que se encuentra inmerso el país y del que surgen los ciclos empobrecedores del grueso de la población mexicana. Habría entonces que comenzar la búsqueda sistemática de salidas que incorporen dimensiones nuevas o enmienden a las políticas económicas en boga.

Es evidente que cambios en el entorno mundial y obstáculos de toda índole harían desastroso, inviable, cualquier intento de volver al patrón de crecimiento anterior. Por lo demás, los países en desarrollo no generan los paradigmas económico-ideológicos que de época en época prevalecen en el mundo. Su tarea es más simple conceptualmente y más ardua en la instrumentación por cuanto han de adaptar ideas y absorber presiones foráneas, pese a los trastornos que puedan ocasionarles en lo interno.

Por consiguiente, la suerte de los países en desarrollo depende del éxito en lograr una doble adaptación. De un lado, a las normas que rigen los órdenes económicos y políticos internacionales. De otra parte, a las demandas de los ciudadanos, afectados por las mudanzas institucionales y estructurales que se instrumentan. En México se ha preferido cuidar del acomodo externo, mientras se ha descuidado el frente interno, como lo atestigua el avance de la reforma económica y el rezago de la modernización política. En cualquier caso, los márgenes de maniobra de los gobiernos son estrechos, pero importantes. Y, hay, además, experiencias aprovechables de otras latitudes. Con altibajos, la historia del sudeste asiático enseña caminos para combinar apertura externa con políticas activistas de desarrollo; Chile ocupa un lugar privilegiado en conciliar crecimiento con equilibrios externos (cambiario) e interno (precios); Uruguay y Costa Rica en integrar desarrollo con protección al bienestar de las poblaciones.

En México, salir del entrapamiento transicional asociado al cambio de patrón de crecimiento, exigiría rebasar los linderos de la ortodoxia económica para abordar planteamientos estratégicos de alguna envergadura. En primer término está la incorporación decidida de acciones que lleven a redondear las transformaciones institucionales hasta completar los mercados y hacerlos funcionar apropiadamente.⁸ También habría que duplicar los esfuerzos en materia de formación de capital humano y enriquecer la infraestructura física y de servicios a costas y fronteras a donde habrán de ubicarse o trasladarse las actividades productivas en consonancia con la estrategia exportadora de crecimiento. De la misma manera debieran promoverse líneas de especialización en el comercio mundial y en la atracción de inversión extranjera directa, donde la hotelería, la maquila compleja y el abasto estatal de energéticos podrían erigirse en ventajas comparativas dinámicas de primera importancia.

Enseguida cabría mencionar la tarea no menos urgente de democratizar la política económica como un ingrediente fundamental, *sine qua non*, de la modernización del sistema político nacional. Se trataría en esencia de abrir las compuertas a otra etapa de crecimiento compatible con la absorción de la fuerza de trabajo, y el combate a la ingobernabilidad, la pobreza o la corrupción. Al propio tiempo, habría que implantar retoques a las políticas presentes, a fin de atender los problemas que suscita la propia dinámica de las transformaciones internas o la de los mercados internacionales globalizados.

La transferencia de funciones del Estado al mercado ha desplazado la preeminencia anterior de los gobiernos en definir las políticas económicas y dictar las relaciones entre los agentes productivos. Por tanto, hay necesidades de formación

⁸ Muchos mercados son poco modernos y en otros casos son incompletos o inexistentes (faltan lonjas de mercaderías, redes privadas de comercialización, mercados de coberturas y opciones, mecanismos regulatorios de la competencia, garantías contractuales, etc.)

sistemática de consensos que corresponsabilicen a empresarios, trabajadores y gobierno en la selección equilibrada de las estrategias nacionales. Cabría reconocer aquí que los tiempos del autoritarismo anterior, son ya un anacronismo que, de persistir, nos hundiría sin remedio.

A partir de esas dos premisas vertebrales se abre la posibilidad de formular verdaderas políticas democráticas de Estado apoyadas en una sociedad civil participante. El punto de arranque obligado consistiría en definir un conjunto equilibrado de objetivos sociales. No sólo importan los llamados equilibrios macroeconómicos o el apaciguamiento de la inflación; la eficiencia no es el único bien a perseguir, también lo son la armonía social, la equidad, el combate a la marginación de muchísimos trabajadores.

Descendiendo en el nivel de generalidad de los objetivos, habría que centrar esfuerzos en crecer más rápido, aunque hubiese de admitirse una inflación algo mayor, en regular los flujos desestabilizadores del capital foráneo, en asumir políticas sociales que prevengan la difusión de la pobreza, en vez de intentar atenuar con posterioridad sus efectos más dañinos.

Avanzar en la dirección apuntada supondría implantar innovaciones en las políticas prevalecientes. De un lado, sería preciso abandonar la práctica de usar la apreciación del tipo de cambio, sea para reprimir presiones inflacionarias o restringir la actividad económica interna. De otra parte, es urgente echar a andar políticas industriales con el triple objetivo de hacer reconversión productiva, fomentar exportaciones y sustituir compras foráneas con eficiencia. Aquí se buscaría aliviar el estrangulamiento externo que limita la tasa asequible de desarrollo, tanto como la solución de la situación crítica que vive el grueso de la pequeña y mediana industria o la agricultura campesina.

Reanimar esos segmentos de la economía mediante programas de capitalización, acceso al crédito y de reconversión productiva, contribuiría sensiblemente a vigorizar los decaídos mercados de trabajo. Con todo, sería aconsejable, además, convenir entre los factores de la producción una política de máxima retención posible de la mano de obra en las empresas. Los estímulos a ese propósito podrían consistir en la supresión o sustitución de los gravámenes que encarecen artificialmente los salarios, en otorgar algunos incentivos fiscales específicos --como el subsidio al seguro agrícola--, en organizar y comprometer a los trabajadores a participar activamente en programas de adiestramiento y de eficiencia productiva.

La solución de los problemas críticos afectan a la pequeña y mediana industria y a la agricultura, serviría por igual de piedra de toque al saneamiento de la cartera de las instituciones bancarias, así como a la reconstrucción de las funciones de intermediación financiera de las mismas. Como lo atestigua el Fobaproa, la remodelación del sector financiero sufrió diferimientos que lo agravan, al punto de hacer necesario operaciones mayores de rescate. Hasta ahora, las medidas no han resultado bastantes. Será fundamental capitalizar a los principales bancos del país, permitir fusiones e integraciones, hasta lograr permanezca en manos nacionales una parte importante de la banca, tanto como afinar los mecanismos de supervisión y control. Aquí, examinar los esquemas de reconstrucción y fortalecimiento financiero, como el japonés, el español o el chileno, podría resultar un ejercicio útil.

No hay fórmula de regulación que impida el acrecentamiento del sector informal de la economía --ya absorbe más del 50% de la fuerza de trabajo--, mientras no se eleve sostenidamente el ritmo de desarrollo nacional. Y esto tiene importancia no sólo desde el punto de vista de la incorporación del grueso de los trabajadores a las redes básicas de seguridad social, sino también desde una perspectiva fiscal.

México tiene una carga tributaria muy baja (9-10% del producto) que dificulta enormemente equilibrar las cuentas públicas, mientras se intenta satisfacer demandas crecientes en materia de infraestructura, fomento, gasto social y administración. Con un crecimiento más intenso del producto se enriquecerían las recaudaciones y sería factible ensanchar la base de causantes. Aun así, probablemente resultara necesario instrumentar una reforma tributaria que gradualmente liberara de restricciones el gasto público prioritario, eliminase los gravámenes a la mano de obra e imprimiese cierto grado de progresividad y elasticidad al sistema impositivo.

La holgura fiscal que se ganaría por la vía apuntada, serviría al propósito de garantizar un gasto social ascendente, dirigido a cuidar y mejorar el capital humano. Hoy por hoy se eroga más del 50% del presupuesto programable con esos propósitos y singularmente en compensar los efectos de la pobreza. Ya está próximo un tope o techo fiscal, donde mayor gasto en esos rubros llevaría a comprimir los destinados a otras asignaciones de alta prelación. Por tanto, habría que reformular la estrategia. En vez de dirigirla exclusivamente a aliviar la pobreza, ya creada, convendría poner la atención en prevenirla con anticipación.

En ese sentido, todo justifica comenzar a crear derechos sociales exigibles --como los que absorben el 50% de las partidas presupuestarias del gobierno norteamericano-- que garantizaran, diversas metas asociadas al bienestar de las familias: la adecuada nutrición infantil, el acceso generalizado a los servicios educativos y, más adelante, los seguros al desempleo. Ese tipo de iniciativas incorporaría orgánicamente elementos contracíclicos en la política fiscal. Así a la par de contribuir a reducir oscilaciones en el crecimiento económico, compensarían las medidas en boga que pretenden atacar la depresión, con un cúmulo de medidas restriccionistas.

Como es fácil concluir, de estas notas sueltas, salir del atolladero transicional implica redondear las mudanzas emprendidas con cambios complementarios, en múltiples campos que, además, pueden tener plazos largos de maduración. Resalta la complejidad de una tarea que supone acometer más o menos simultáneamente reformas en el campo social, industrial, fiscal e institucional. Con todo, hay ancho campo para innovar, aprovechar oportunidades de desarrollo, y mejorar la suerte de la economía mexicana. Acaso el requisito básico es el de rectificar cuanto antes y el de convenir consensualmente políticas que corresponsabilicen a gobierno, sociedad civil y agentes productivos en un reparto menos desigual de los beneficios y costos del cambio estructural.

La legitimación democrática de las políticas públicas, exige reconstruir al Estado en sus dimensiones de promotor del desarrollo y de equilibrador social. Ciertamente, México necesita desterrar la arbitrariedad del autoritarismo, pero requiere del liderazgo de un Estado fuerte, justo, capaz de impulsar la transición por cauces civilizados.